

Inclusión digital como infraestructura económica

Desde la publicación del libro de don Ricardo Lagos, En vez del pesimismo, personalmente no he percibido que la inclusión digital se aborde con la fuerza que merece como herramienta para la prosperidad económica y la competitividad del país. Con frecuencia, se la analiza desde uno de sus ángulos relevantes —aunque no el único—: su dimensión social, asociada a la conectividad en zonas aisladas, la alfabetización tecnológica o el acceso a dispositivos.

Sin embargo, en la actual economía del conocimiento, la inclusión digital debe comprenderse de manera mucho más profunda. Hoy constituye prácticamente una variable de supervivencia competitiva para los países. Resulta difícil concebir una política pública estructural de desarrollo productivo que no la integre de manera plena.

Las economías que lideran la transformación digital no lo hacen únicamente porque cuentan con la mejor infraestructura tecnológica del mundo. Lo logran porque han integrado capacidades digitales en toda su estructura económica y social. Esto implica capital humano altamente preparado: ciudadanos con habilidades digitales que les permitan aprovechar las oportunidades de la economía digital; empresas capaces de adoptar tecnologías avanzadas para innovar y aumentar su productividad; y un Estado que utilice la digitalización para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, fortalecer la competitividad y elevar los estándares de gestión pública.

Diversos organismos internacionales coinciden en este diagnóstico. El Banco Mundial destaca que el desarrollo de ecosistemas digitales inclusivos se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento económico, la innovación y la resiliencia frente a crisis en las economías emergentes (World Bank, Digital Progress and Trends Report 2023).

En Chile, este desafío adquiere una relevancia particular. Afortunadamente, la brecha digital ya no se explica exclusivamente por el acceso a internet —un desafío abordado de manera sostenida durante las últimas décadas por distintos gobiernos—, sino por la capacidad efectiva de ciudadanos y empresas para participar en la economía digital: utilizar datos, adoptar inteligencia artificial, digitalizar procesos productivos e integrarse a cadenas de valor tecnológicas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que las empresas latinoamericanas que adoptan herramientas digitales avanzadas registran niveles de productividad significativamente mayores que aquellas que no lo hacen. Sin embargo, la adopción tecnológica sigue siendo desigual, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas (BID, La era digital en América Latina y el Caribe). De hecho, estudios recientes señalan que más del 70% de las pymes de la región se encuentran aún en un nivel básico de uso de datos y analítica, lo que limita su capacidad de utilizar la información como un activo estratégico (BID, El poder de los datos: Impulsando la transformación digital de las pymes de América Latina, 2025).

Desde la perspectiva del desarrollo productivo, la inclusión digital debe consolidarse como una prioridad estratégica de política pública. En países

como Chile, incluso puede considerarse un imperativo ético, especialmente en contextos de alta incertidumbre económica y social.

Avanzar en esta dirección exige actuar simultáneamente en tres dimensiones clave: Conectividad digital de alta calidad en todo el territorio, formación sistemática de talento digital en todas las etapas educativas, incorporando el desarrollo de habilidades digitales como parte de una verdadera cultura nacional y una agenda robusta de transformación digital empresarial y estatal, que permita a organizaciones de todos los tamaños integrar tecnología en sus procesos productivos, modelos de negocio y gestión pública.

Para que este potencial se materialice, es indispensable construir un ecosistema donde infraestructura digital, capital humano, innovación empresarial y marcos regulatorios trabajen de manera coordinada hacia un objetivo común de crecimiento y desarrollo. En ausencia de una estrategia país consensuada que articule estas dimensiones, la digitalización —y especialmente el avance de la inteligencia artificial— podría incluso profundizar brechas productivas y sociales que luego resultarán mucho más difíciles de cerrar.

En este contexto, la inclusión digital no debe entenderse únicamente como una política social. Debe asumirse como una política económica permanente y de largo plazo. Constituye uno de los pilares sobre los cuales Chile puede consolidar una economía más innovadora, competitiva y capaz de capturar mayor valor en las nuevas cadenas productivas basadas en el conocimiento.

Si aspiramos a que la economía digital contribuya de manera decisiva al crecimiento de Chile, la inclusión digital debe dejar de ser un programa sectorial y transformarse en una estrategia nacional de desarrollo productivo.

En organizaciones como ACTI, y particularmente en nuestra Mesa de Capital Humano, existe una comunidad de profesionales, empresas y expertos con experiencia, conocimiento y acceso a las mejores prácticas internacionales, plenamente disponibles para colaborar en la construcción de esta estrategia.

Finalizo esta nota destacando las palabras del ex Presidente Sebastián Piñera a propósito del despliegue de la tecnología 5G el año 2021: “Chile debe estar del lado de donde se crean los empleos gracias a la Revolución Tecnológica y no del lado donde se pierden debido a ella. Por eso debemos estar siempre alertas, vigilantes y anticipándonos, para aprovechar en nuestro beneficio la enorme fuerza de esta poderosa ola que es la revolución tecnológica”.



Gilbert Leiva, director de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI A.G.) y presidente de la Mesa de Capital Humano de ACTI

TALENTO DE AMADOR

¡Cazador!... ¡Cazador!
Recorro praderas y valles trasmontanos

